

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA ARTICULACIÓN DEL ACUERDO MARCO QUE FIJA LAS CONDICIONES A QUE HABRÁN DE AJUSTARSE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, DE “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, MEDIANTE LA MODALIDAD DE CHEQUE FORMACIÓN, EN LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING”.**

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, establece en su artículo 3, que, entre los principios que rigen el sistema de formación profesional para el empleo, se encuentra el del ejercicio del derecho individual a la formación y la garantía de igualdad en el acceso de los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a las necesidades del mercado de trabajo, así como la calidad, eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión.

Asimismo, la referida norma, en su artículo 6.4, establece que *“Los fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las iniciativas de formación gestionadas por las comunidades autónomas, se distribuirán de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Asimismo, en la asignación y seguimiento de estos fondos será de aplicación la Estrategia Española de Activación para el Empleo vigente en cada momento y, en particular, su distribución entre las comunidades autónomas en función del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Políticas de Empleo de cada ejercicio, así como el control y garantía de la máxima eficiencia en la utilización de dichos fondos.”*

Por lo que se refiere a las formas de financiación para la aplicación de los fondos de formación para el empleo, el mismo artículo 6 de la Ley 30/2015, prevé la posibilidad de que, como alternativa a las convocatorias de subvenciones, los servicios públicos de empleo competentes podrán proporcionar un «cheque formación» a los trabajadores desempleados que, de acuerdo con su perfil, les acredite para realizar acciones formativas concretas dirigidas a mejorar su empleabilidad. En este caso, el trabajador entregará el citado cheque a la entidad de formación seleccionada por él de entre las que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción establecidos para impartir la formación, que, a su vez, sean seleccionadas por la Administración competente para formar parte del sistema de información y seguimiento específico que se desarrolle al efecto.

Igualmente, en el apartado c) del citado artículo 6, se establece que *“Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, las Administraciones públicas competentes podrán aplicar el régimen de contratación pública, o cualquier otra forma jurídica ajustada a Derecho que garantice la publicidad y la concurrencia, a lo previsto en el artículo 7 así como a las restantes previsiones recogidas en esta ley relativas a la gestión de fondos del sistema de formación profesional para el empleo, su seguimiento y control, así como la calidad y la evaluación de la formación impartida.”*

Es, por todo lo anterior, un deber de la administración autonómica, garantizar el ejercicio del derecho individual a la formación para el empleo y hacerlo utilizando el instrumento jurídico que garantice en mayor medida una gestión de los fondos públicos eficaz, eficiente y lo más adaptada posible a las concretas necesidades formativas de las personas trabajadoras en



situación de desempleo, de modo que se maximicen sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.

Las convocatorias de subvenciones constituyen un medio de financiación que, si bien garantiza el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, no permite adaptar de modo flexible la impartición de las concretas acciones formativas a las necesidades de los trabajadores en situación de desempleo, en lo que se refiere a la fecha de inicio de las mismas, la ubicación geográfica del centro de formación y el número y determinación de las especialidades que, en función del perfil profesional de aquéllos, sean las más adecuadas para facilitar su inserción profesional.

Por este motivo, es necesario posibilitar la prestación de este servicio público mediante la modalidad del cheque formación, que permite que cada persona en situación de desempleo pueda realizar la más adecuada acción formativa, en función de su itinerario y perfil, consensuado con el Servicio Público de Empleo y que el usuario del mismo pueda hacerlo en el centro que establecido por la Administración en función de los criterios del acuerdo marco, más se ajuste a sus preferencias tales como, domicilio, resultados de la evaluación de calidad de las imparticiones y el momento en que la especialidad vaya a iniciar su ejecución.

Asimismo, esta modalidad permite financiar exclusivamente el número de plazas que realmente se necesiten, contrayendo exclusivamente el crédito necesario para ello y, por tanto, permitiendo disponer de los fondos necesarios de un modo mucho más flexible y continuado en el tiempo, sin tener que esperar a la justificación y liquidación de las correspondientes ayudas concedidas para determinar si el crédito dispuesto se ha ejecutado en su totalidad.

La modalidad de impartición de formación para el empleo mediante el cheque formación, exige las siguientes condiciones, de conformidad con lo establecido en la referida Ley 30/2015, de 9 de septiembre:

- a) Es el trabajador quien selecciona a la entidad de formación entre las que cumplan los requisitos de acreditación y/o inscripción establecidos para impartir la formación.
- b) La Administración debe seleccionar a las posibles entidades que formen parte del sistema.
- c) La selección de las entidades de formación debidamente acreditadas y/o inscritas que participen en la implantación del cheque formación deberá garantizar los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia.

Por su parte, el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, determina las siguientes condiciones de esta modalidad:

- a) El cheque formación posibilitará al trabajador participar en una actividad formativa con un coste preestablecido, sin que en ningún caso suponga una aportación dineraria directa al trabajador.



- b) La Administración deberá desarrollar un sistema de información y seguimiento específico de la actividad formativa del trabajador, que permita la conexión on-line de las entidades de formación seleccionadas con el servicio público de empleo competente.
- c) Una vez finalizada y justificada la realización de la acción formativa, la Administración Pública competente abonará a la entidad de formación la cantidad correspondiente al cheque formación.

Estas especiales condiciones, determinadas en la normativa vigente, hacen que la forma idónea para cubrir la necesidad que se pretende satisfacer sea mediante la utilización de uno de los sistemas de racionalización técnica de la contratación pública: la celebración de un acuerdo marco.

En efecto, dicho sistema, por aplicación de lo previsto en el artículo 220 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), y dado que el procedimiento de adjudicación que se utilizará será el abierto con pluralidad de criterios, valorables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, garantiza el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia, exigidos por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo.

Asimismo, la posibilidad establecida en el artículo 219 de la LCSP, de concluir acuerdos marco con varios empresarios, garantiza que exista una pluralidad de entidades y centros de formación, con una equitativa distribución territorial en la Comunidad de Madrid y, por tanto, permite de una forma efectiva cumplir con las exigencias de seleccionar a las entidades que cumplan los requisitos necesarios para estar en el sistema y de que el trabajador en situación de desempleo pueda elegir el centro que más se ajuste a sus necesidades y características.

Por otro lado, la previsión establecida en el artículo 221.4 de la LCSP que posibilita que, cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la adjudicación de los contratos en él basados se efectúe aplicando los términos fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una nueva licitación, en su caso, atendiendo a la preferencia manifestada por el alumno, en base a criterios de ubicación del centro, fechas de impartición de la acción formativa, valoración del centro por parte de otros alumnos, etc., que más se adecúen a sus intereses y siempre que no exista impedimento alguno. La Administración dejará constancia de la selección de la entidad adjudicataria, mediante informe en el que se motive dicha selección, en el expediente de tramitación del contrato derivado.

Adicionalmente, la ausencia de necesidad de someter a las partes a una licitación para la adjudicación de los contratos derivados simplifica y reduce sustancialmente los tiempos necesarios para ejecutar cada una de las acciones formativas necesarias, lo que redundará en la necesidad de garantizar la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos destinados a la formación para el empleo, minimizando los riesgos de renuncias de alumnos y posibilitando una distribución temporal ajustada a las necesidades reales de los demandantes de empleo cuyos itinerarios personalizados de inserción requieran de la realización de acciones formativas.





Dirección General de Formación  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
EMPLEO Y HACIENDA

**Comunidad de Madrid**



MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO  
DE EMPLEO ESTATAL



UNIÓN EUROPEA  
FONDO SOCIAL EUROPEO  
*El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro*

Por último, la celebración de un acuerdo marco permite maximizar la utilización, eficacia y destinos de dichos fondos, al adaptar el número de plazas y acciones formativas a las necesidades reales de los trabajadores en situación de desempleo, a medida que éstas se detectan, en lugar de determinar su número y características en función de previsiones.

Por lo que se refiere a los criterios de adjudicación del acuerdo marco, como ya se ha indicado y con el objeto de garantizar los principios de publicidad, objetividad y libre concurrencia, exigidos por la normativa vigente en materia de formación profesional para el empleo, el procedimiento elegido será el abierto. Dado que los contratos derivados que se pretenden adjudicar son de servicios, por aplicación de lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, se utilizará una pluralidad de criterios, directamente relacionados con la calidad y la efectividad en el cumplimiento del objetivo de la prestación del servicio que constituye el objeto de los contratos derivados del mismo y cuya valoración se efectuará mediante la aplicación de fórmulas matemáticas.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la celebración de un acuerdo marco que fije las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos de servicios de impartición de cursos de formación para el empleo mediante la modalidad de cheque formación en los certificados de profesionalidad de la familia profesional de comercio y marketing es necesaria para cumplir con la obligación de la administración autonómica de satisfacer el derecho individual a la formación para el empleo de las personas desempleadas, mediante la articulación de un sistema de cheque formación y, además, constituye la forma idónea de cubrir esta necesidad de interés público.

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **088891747313498966634**